

Comentarios

Sombrío panorama pre-electoral

El 20 de enero recién pasado, el Consejo Central de Elecciones (CCE) declaró oficialmente abierto el período de propaganda para la campaña electoral. El país entró con ello en la recta final del quinto evento electoral habido dentro del proceso político salvadoreño desde las elecciones para integrar la asamblea constituyente, realizadas en marzo de 1982. Sin embargo, no obstante la grave crisis socio-política por la que atraviesa El Salvador, los partidos políticos actualmente contendientes no parecen haber sacado enseñanza alguna de la experiencia electoral de los años recientes ni estar a la altura de los retos que esa crisis supone.

Desde el punto de vista formal, los dispositivos para depurar la fiabilidad del sistema electoral parecen haber sido perfeccionados, no sin atravesar numerosos escollos, como la muestran las vicisitudes corridas por el nuevo Código Electoral. En efecto, junto a las discusiones sobre el Presupuesto General de la Nación, la cuestión del Código Electoral se constituyó explícitamente desde la segunda mitad de diciembre en el objeto principal de todas las batallas políticas desarrolladas en la asamblea legislativa. Todas las plenarias, ordinarias y extraordinarias, habidas con tal propósito, fueron

sucesivamente suspendidas y pospuestas, a la espera de que el PDC y el PCN llegaran a un acuerdo. El foco principal de la polémica estribaba en la pretensión del PDC de conferirle poderes absolutos al presidente del CCE, correligionario suyo, a la cual se oponían visceralmente el PCN y las restantes fuerzas de derecha. Otras objeciones de la derecha se referían a las presuntas intenciones democristianas de utilizar la cédula de identidad personal como sucedáneo del carnet electoral durante los comicios. "Si vamos a votar con cédula" —argumentaba el secretario general del PCN y vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Hugo Carrillo— "el fraude del PDC sería terrible, pues controla la mayoría de las alcaldías y existe la posibilidad de que emita cédulas falsas." A todo ello, por su parte, ARENA añadía la exigencia de que el código impidiera la elegibilidad de candidatos que estuvieran ligados familiarmente a algún alto funcionario gubernamental, en abierta alusión a la postulación de Alejandro Duarte como candidato a alcalde de San Salvador.

Con todo, la contradicción entre los intereses de una y otra parte tuvo que ser zanjada por la premura que el curso del proceso electoral imponía. En la sesión del 8 de enero, por 24 votos del PDC y 10 del PCN,

la Asamblea aprobó el Código Electoral, tras convenir ambos partidos que, a cambio de los votos del PDC al código, el PCN daría los suyos para la aprobación de una emisión de 100 millones de colones en bonos de refuerzo al Presupuesto General de la Nación de 1987. La fracción de ARENA se abstuvo, arguyendo que el nuevo código era inconstitucional en diversos aspectos. Por su parte, nueve diputados demócratacristianos, simpatizantes de la corriente de Fidel Chávez Mena, optaron por no asistir a la plenaria, como gesto de repudio ante las maniobras desplegadas por la "argolla" para imponer la precandidatura presidencial de Julio Adolfo Rey Prendes. La ausencia de estos diputados impidió alcanzar la mayoría cualificada de 40 votos requerida para aprobar el refuerzo presupuestario.

Tras la aprobación del Código Electoral han seguido los preparativos finales del evento. El presidente del CCE, Mario Samayoa, ha asegurado que, como fruto de todo ello, el 20 de marzo se reducirá el margen de abstencionismo respecto de los comicios de 1985, en los cuales fue de un 30 por ciento. Según los datos aportados por Samayoa, casi 2 millones de salvadoreños se habrían empadronado, de los cuales más de 83 por ciento ya habría recogido su respectivo carnet electoral. Tanto la implementación del carnet como el uso de tinta indeleble "evitará fraudes, como ocurría hace menos de diez años." Adicionalmente, unos 200, observadores internacionales presenciarán el evento y casi 7 mil urnas electorales serán distribuidas en todo el país. Para la sola realización de los comicios, el gobierno destinará 2.8 millones de dólares, aparte de los 6.8 millones de dólares previamente otorgados para la extensión del carnet electoral.

No son, pues, los dispositivos formales de la mecánica electoral los que despiertan suspicacias sobre la capacidad del juego electoral para viabilizar la democracia en El Salvador. El problema es más de fondo. Lo que espanta no es tanto la posibilidad de

fraude, sino el espectro de alternativas posibles y la galería de candidatos entre los cuales saldrán los integrantes de la próxima asamblea legislativa y de los 262 concejos municipales durante los tres próximos años.

Fuerzas sociales y políticas muy diversas, incluidas la Iglesia católica y la Fuerza Armada, han repetido hasta la saciedad que la campaña electoral se ha venido desarrollando en un clima de polarización que desdice considerablemente de la "altura cívica" a la cual, según los partidos participantes, iban a remontar sus planteamientos.

A pocos días de que finalice la campaña, aún brilla por su ausencia la presentación de planteamientos que siquiera a nivel programático ofrezcan un diagnóstico medianamente serio de la problemática del país y apunten vías mínimas de solución. Hasta la fecha, la campaña electoral no ha ofrecido otra cosa que demagogia, oportunismo y acusaciones *ad hominem* contra los candidatos opositores. No es casual que sean precisamente ARENA y el PDC, cuyas cuñas y desplegados propagandísticos han saturado los distintos medios de comunicación, los partidos que han tomado la delantera en el intercambio recíproco de insultos y acusaciones procaces sobre las facetas biográficas más oscuras de sus dirigentes. En gran medida, en el financiamiento de tal campaña se han esfumado millones de colones de la deuda política que, según la legislación electoral, el Estado contrae con los partidos que hayan alcanzado más votos en los comicios inmediatamente anteriores.

Desde el inicio del período oficial de propaganda, ARENA y el PDC se enfrascaron, en ausencia de contenidos positivos que ofrecer para sacar al país de la crisis, en una campaña difamatoria recíproca de proporciones tales que ambos partidos se vieron forzados a convenir, el 18 de febrero, el cese de los vituperios mutuos. Hasta ese momento, la propaganda demócratacristiana había estado primordialmente orientada a recalcar

la vinculación de ARENA, y particularmente del mayor D'Aubuisson, con los escuadrones de la muerte. Por su parte, Arena articuló su campaña en torno a las denuncias sobre el nepotismo y la corrupción imperantes en el seno de la gestión demócratacristiana. Tras el "pacto de caballeros" suscrito entre ambos partidos el 18 de febrero, algunos sectores políticos creyeron ingenuamente que la campaña tomaría otro rumbo. En virtud de dicho pacto, ARENA y el PDC se comprometieron a proseguir su propaganda "dentro de los términos legales y de altura cívica." Sin embargo, el curso subsiguiente de la campaña ha constituido un rotundo mentís al acuerdo. Así lo confirman las recientes acusaciones formuladas por el coronel Sigifredo Ochoa Pérez sobre el lucrativo negocio que para el PDC supondría la prolongación de la guerra, y el provecho propagandístico que ARENA ha tratado de sacar de la denuncia del *New York Times* sobre la malversación de los

fondos de CONARA por parte de Luis Mejía Miranda, candidato a diputado por el PDC y presunto amigo íntimo de Alejandro Duarte.

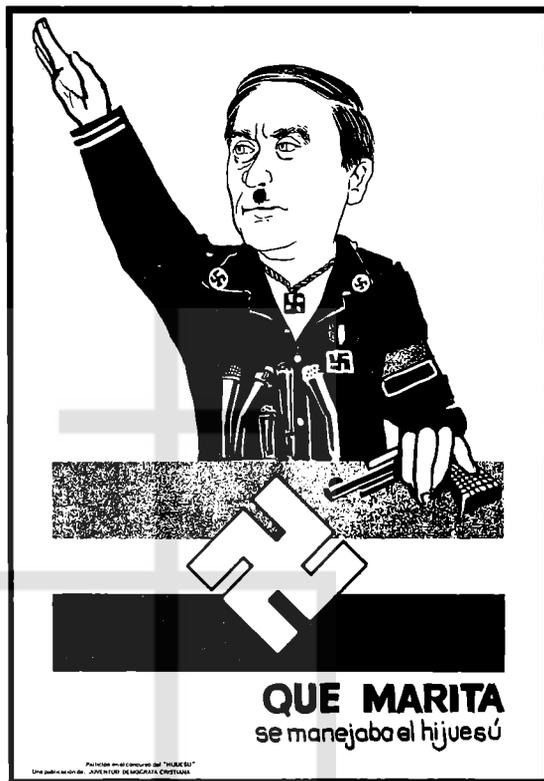
Tal situación no sería tan grave y deprimente si no fuera porque, dado el actual sistema de partidos y dadas las estructuras actuales del juego electoral, son precisamente ARENA y el PDC quienes mayores probabilidades tienen de hacerse con el control del poder legislativo y de los poderes municipales locales. De hecho, el PDC tiene ya el control de la asamblea y del grueso de las municipalidades, pero la mayoría de encuestas sugiere que el poder político formal que detentan los demócratacristianos podría verse considerablemente mermado tras la próxima consulta electoral. El propio ex-ministro de cultura y principal precandidato demócratacristiano para las elecciones presidenciales del año próximo, Julio Adolfo Rey Prendes, admitió el 10 de febrero, ante la Asociación de Corresponsales Extranjeros de México, que el PDC tiene en su contra el "desgaste natural" ocasionado por tres años y medio al frente de una gestión estatal dificultada por la guerra y por una severa crisis socio-económica. "Tenemos" —expresó Rey Prendes— "el problema de captar de nuevo la esperanza del pueblo y la confianza en nosotros." Empero, tal tarea de recuperación de credibilidad parece bastante difícil si se considera que, ante la conciencia popular, el fracaso de la gestión demócratacristiana no se debe solamente a las dificultades intrínsecas de la situación del país, sino también, en gran medida, a prácticas de corrupción que nada pueden envidiar a las que los propios demócratacristianos reprochaban al PCN cuando el PCN se encontraba en la oposición. Por otro lado, la alternativa con mayores probabilidades electorales, representada por ARENA, no suscita más esperanzas que las que pueden inspirar el continuismo del PDC. Más allá de los particulares intereses electorales con que la propaganda demócratacristiana ha recordado la vinculación histórica de ARENA con los



escuadrones de la muerte, las acusaciones del PDC parecen ser en lo fundamental verosímiles. Las furiosas protestas con que ARENA ha reaccionado a ellas no han hecho sino confirmar que, en el fondo, tales acusaciones contienen una buena parte de verdad histórica.

En este marco, la disputa por la alcaldía de San Salvador se ha constituido en uno de los frentes principales de la guerra sucia electoral. Como no podía ser menos, la pugna se ha centrado entre el hijo del presidente, Alejandro Duarte, postulado por el PDC tras desplazar en la contienda interna demócratacristiana al otro precandidato, Alfredo Navas —excuñado de Alejandro—, y el jefe de fracción de ARENA en la asamblea legislativa, Armando Calderón Sol, postulado por una coalición integrada por ARENA, Liberación, PAISA y el PPS. La idea de la coalición, según aseguró el secretario general de Liberación, Hugo Barrera, habría sido iniciativa de su partido. Inicialmente, la coalición habría pensado en la candidatura de la doctora María Julia Castillo (PAISA), quien fuera derrotada en las pasadas elecciones por el Dr. José Antonio Morales Ehrlich. Por otra parte, en un principio, el candidato de ARENA para la alcaldía capitalina era el ingeniero Rafael Montalvo, mientras que Calderón Sol estaba postulado como candidato a primer diputado propietario por San Salvador. Posteriormente, al integrarse la coalición Montalvo fue relegado a candidato a primer diputado suplente por San Salvador, detrás del presidente de ARENA, Alfredo Cristiani, candidato a primer diputado propietario por el mismo departamento. Según el coronel Ochoa Pérez, ese conjunto de recambios obedecería a una estrategia política encaminada a presentar un contendiente "de altura" contra el PDC. "Nos enfrentamos" —precisó Ochoa— "con un enemigo capaz de cualquier cosa, incluyendo el fraude."

El PDC ha interpretado la candidatura de Calderón Sol como un craso error político que



equivaldría a su sacrificio político durante los próximos tres años. El ministro de cultura, Roberto Viera, exonerado temporalmente de su cargo mientras conduce la campaña electoral demócratacristiana, ha opinado que "el Dr. Armando Calderón Sol se va a quedar 'sin el plato y sin la cena' porque él, siendo el primer candidato a diputado que llevaba ARENA, era un seguro diputado. Ahora no tiene posibilidades ni de diputación ni de alcaldía. Es decir, lo han sacrificado. A su vez, en respuesta a tales apreciaciones, el propio Calderón Sol ha replicado que es más bien el PDC el que va a sacrificar a Alejandro Duarte, ya que "Rey Prendes, artífice de la división interna del PDC, sabe que el hijo del presidente será derrotado en los comicios porque el pueblo salvadoreño repudia el nepotismo de la democracia cristiana y su incapacidad para gobernar." Así, "sacrificando al actual candidato del PDC para la alcaldía, Rey Prendes tendrá el camino libre

para su postulación a la presidencia de la república, para lo cual necesita librarse de los duartistas, quienes pretenden perpetuarse en el poder a como dé lugar." Por su parte, en medio de esta disputa, el PCN ha asegurado que su candidato a alcalde de San Salvador, Carlos Remberto González, será el triunfador de la contienda, aun cuando la trayectoria política de González, quien fue presidente de la Sociedad de Comerciantes e Industriales y militó por algún tiempo en las filas del partido Liberación, desdice bastante del ideario presuntamente socialdemócrata que la nueva generación del PCN asegura profesar.

Convergencia Democrática ha optado sensatamente por mantenerse al margen de este *pandemonium* electoral, si bien tardó varias semanas en anunciar públicamente su decisión de no concurrir a los comicios del 20 de marzo. Tal decisión había sido esperada desde que Guillermo Ungo, secretario general del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y Rubén Zamora, secretario general del Movimiento Popular Social Cristiano (MPSC) visitaron el país durante la última semana de noviembre de 1987 e integraron formalmente, junto al Partido Social Demócrata (PSD), la Convergencia Democrática. No obstante, Ungo y Zamora abandonaron nuevamente el país, antes de cumplir dos semanas de haber ingresado, sin haber adoptado una decisión definitiva al respecto.

La nueva visita de Rubén Zamora y de Héctor Oquelí Colindres, efectuada en la última semana de enero, polarizó nuevamente las expectativas sobre la participación de Convergencia Democrática en el evento electoral. Convergencia todavía no se había pronunciado oficialmente sobre su participación en los comicios, pero la ponderación de los pros y contras hacía más probable la decisión de no concurrir a ellos. De hecho, los motivos aducidos al anunciar públicamente, el 28 de enero, la decisión de no participar, fueron fundamentalmente los mismos que Convergencia había venido barajando duran-

te las semanas precedentes como justificación de su escepticismo frente al proceso electoral. Héctor Oquelí, subsecretario de MNR, expresó que "no existen en el país verdaderas condiciones de democratización real" y subrayó que, tal como estaban planteadas, las elecciones no solucionarían los problemas fundamentales del país. En la misma línea, Rubén Zamora puntualizó que las elecciones "deben ir más allá, no solamente solucionar los problemas inmediatos, sino buscar caminos que den fin a la guerra civil que vive el país."

Aunque los dirigentes de la coalición socialdemócrata manifestaron que tal decisión no les impediría desarrollar "una presencia política orientadora" durante el proceso electoral, y descartaron explícitamente que su decisión pudiese interpretarse como un respaldo a la opción del FMLN de boicotear los comicios, de hecho Convergencia Democrática resolvió así la contradicción secundaria que le hubiese ocasionado, frente al FMLN, la eventual decisión de participar en las elecciones.

Tanto Zamora como Oquelí habían distinguido formalmente entre el carácter del MPSC y del MNR como partidos políticos autónomos, y su carácter de integrantes del FDR y, consiguientemente, de la alianza FMLN-FDR. En base a tal distinción, habían asegurado que el FMLN no tenía ningún tipo de potestad política sobre la decisión que asumirían frente a la cuestión electoral. Con todo, sería ingenuo suponer que en la opción definitiva de no acudir a los comicios no haya pesado la postura militantemente anti-electoral que el FMLN mantuvo desde un principio y las amenazas de éste contra aquéllos que se prestasen a la "farsa electoral."

En contrapartida, sin embargo, la posición más mesurada de Convergencia Democrática ha sobredeterminado a su vez la actitud inicialmente más radical y desaforada del FMLN frente a las elecciones. Con un pragmatismo político que en no pocas ocasiones

brilla por su ausencia en las decisiones del FMLN, Rubén Zamora estimó, en cambio, que "boicotear las elecciones es participar en ellas y convertirlas en un plebiscito," en razón de lo cual la manera más lúcida de responder a la contrainsurgencia norteamericana-democratacristiana sería "oponerse a ella desde dentro y presentar una alternativa democrática." En la misma línea, Héctor Oquelí manifestó que "ningún boicot logrará el objetivo que se puede pretender. Las elecciones se terminarán haciendo en el país."

Efectivamente, las elecciones se terminarán haciendo, pero no hay fundadas esperanzas de que ello contribuya a viabilizar la democracia en El Salvador. La opinión pública salvadoreña parece también percibirlo así, a juzgar por las encuestas corridas por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA. Las encuestas revelan una situación paradójica pero, por lo mismo, enormemente significativa. Por un lado, 4 de cada 5 salvadoreños encuestados han manifestado su disposición a concurrir a las urnas el 20 de marzo. Por otro lado, sin embargo, también 4 de cada 5 salvadoreños se muestran escépticos sobre las potencialidades de los partidos contendientes para encarar los problemas del país. De entre quienes se muestran definidos por una alternativa política concreta, el 21.1 por ciento manifiesta su preferencia por ARENA un 15.9 por ciento por el PDC, un 7.9 por Convergencia Democrática y un 4.9 por ciento por el PCN.

Cualesquiera que sean los resultados de las elecciones, las perspectivas no son muy alentadoras. Aparentemente, la derecha está persuadida de que los comicios redundarán en la pérdida del control democratacristiano sobre el órgano legislativo. Según el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Eduardo Funes Hartman, el PCN y el PDC "no van a tener más de 30 diputados, es decir, que habrá una equiparación de fuerzas más conveniente en la asamblea." De esta suerte, según Funes

Hartman, la "oposición democrática" tendrá los escaños suficientes para "presentar un frente lo suficientemente fuerte como para que las nuevas leyes sean realmente estudiadas." De parte del PDC, el propio Rey Prendes ha admitido las considerables probabilidades de estos vaticinios, si no en su cuantificación concreta, sí en su repercusión cualitativa: el establecimiento de una paridad de fuerzas en el seno de la asamblea, que impediría tanto al PDC como a la derecha sacar adelante sus proyectos respectivos en virtud de la capacidad de veto recíproco que ambos bandos ostentarían.

Este es, a trazos gruesos, el panorama pre-electoral. Lo único destacable en él es la extrema indigencia moral y profesional de quienes se disputan el control de poder formal del Estado, ya que el poder real permanece fuera de la disputa, en manos de Estados Unidos y de la Fuerza Armada. Ninguno de los partidos contendientes ha ofrecido un proyecto político mínimamente articulado que pueda suscitar alguna esperanza. Quizá sería exigir demasiado de ellos, tomando en cuenta sus capacidades. Pero la situación del país plantea también exigencias que no pueden seguirse soslayando. Ninguno de los partidos ha planteado la cuestión del diálogo como un asunto de urgencia nacional, como si el sólo hacer mención de ello condujera *ipso facto* al ostracismo político. Con todo, la presente campaña ha mostrado al menos una radiografía de lo que es la clase política hegemónica en El Salvador y de cómo actúa. Esos son los hombres entre los que, hoy por hoy, se juega el destino del país de acuerdo a las reglas del "proceso democrático." El juego electoral no presenta, por el momento, más alternativas que las de ellos. Se trata de una situación que podría calificarse de bufonada política, si no fuera porque, desventuradamente, la prolongación del desangramiento del país depende en gran medida de esos bufones.

C. A.